

C.A. de Santiago

Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

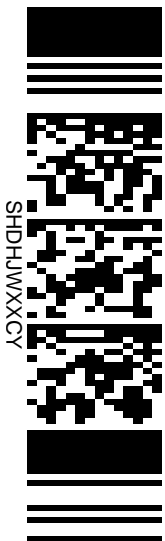
Vistos:

Por sentencia de seis de abril del presente año, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Marcos Esteban Gacitúa Guerrero como autor de dos delitos de falsificación de instrumento público en causa civil, previsto y sancionado en el artículo 193 N° 4 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado, cometido con fecha 8 de septiembre de 2016, en la comuna de Santiago a dos penas de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Contra dicha sentencia la Defensora Penal Privada doña Jacqueline Rodríguez Salazar recurrió de nulidad, fundándose, en lo principal, en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por errónea aplicación del derecho, específicamente en cuanto no se dio cumplimiento a los artículos 4 y 340 del referido cuerpo legal, razón por la que debería haber sido absuelto su representado, por no haberse vencido la presunción de inocencia que le favorecería y que obligaba a absolver.

En subsidio, impetra la causal prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, *“Cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”*.

Alega que la sentencia recurrida al momento de efectuar la valoración de la prueba rendida de cargo y de descargo, contradice de manera clara sus límites, efectuando una valoración que no se



condice con los parámetros que el legislador estableció en el Código Procesal Penal, puntualmente en el artículo 279 del citado cuerpo normativo. Precisa que se coloca como carga de la defensa acreditar la inocencia de su representado, todo lo cual implica una errónea aplicación del derecho. Advierte por lo demás la falta de motivación de la resolución que se impugna por la vía del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, vicio que se manifiesta en diversas partes de la sentencia, donde se consigna un doble estándar probatorio por una parte y por otra, una escasa fundamentación en torno a la prueba rendida, en especial de la incorporada por la defensa, violándose de esta forma, lo dispuesto en el artículo 297 del citado cuerpo legal, a través de lo cual se contradicen los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Solicita se invalide la sentencia definitiva recurrida y en su reemplazo se dicte, sin nueva audiencia, separadamente, sentencia de conformidad a la ley, absolviéndose a sus representados -artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal- o en subsidio, se anule el juicio oral y la sentencia, determinándose el estado en que quede el proceso, remitiéndose los antecedentes a un tribunal no inhabilitado para la realización de un nuevo juicio oral -artículo 374 e) del Código Procesal Penal-.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la causa prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal:

PRIMERO: Que la causal principal que se invoca en este recurso es la letra b) del artículo 373, la que señala que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia *“cuando, en el*



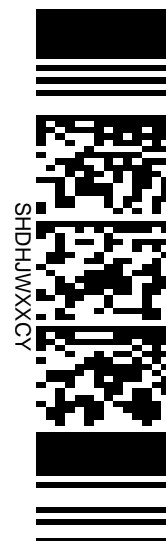
pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

La mentada causal resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquéllos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado-.

En efecto, sólo en el caso que el recurso de nulidad se funde en esta causal genérica podrá invalidarse sólo la sentencia y ello ocurrirá si la invocada no se refiere a formalidades del juicio, ni a los hechos o circunstancias que se hubieren dado por probados, sino que se debiere a -artículo 385 del Código Procesal Penal- que el fallo califique de delito un hecho que la ley no considere tal; que se aplique una pena y no procediere aplicar sanción alguna y; que se imponga una pena superior a la que legalmente corresponda.

SEGUNDO: Que el Tribunal en el considerando séptimo refiere que con los elementos descritos y analizados se acreditaron los siguientes enunciados fácticos, que no pueden ser modificados en esta sede jurisdiccional, a saber:

“Hecho N ° 1



Que el día JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 el imputado Don Marcos Esteban Gacitua Guerrero, aproximadamente a las 12:20 horas concurrió al domicilio ubicado en calle Miraflores 178, piso 22 de la comuna de Santiago, en su calidad de Receptor Judicial y Ministro de fe nombrado por Decreto N°749 del Ministerio de Justicia de fecha 05 Noviembre de 2013, por instrucciones de los demandantes en autos ejecutivos seguidos ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, causa rol 18.897-2016, caratulada Entrelomas sa / Miranda a objeto de proceder a materializar notificaciones y requerimiento de pago en la forma prevista en el artículo 44 y 443 ambos del Código de Procedimiento Civil, esto es, proceder a notificar y requerir de pago por la suma de \$126.944.211, o dejar cédula de espera en su caso para su posterior requerimiento, al querellante don Pablo Andrés Miranda Jimenez e Inversiones Miranda Ltda, para luego de unos minutos retirarse del lugar sin entregar copia de las demandas, cédula de espera o documento alguno en el domicilio donde concurre para materializar la diligencia receptorial.

Posteriormente, con fecha viernes 09 de septiembre de 2016 el imputado don Marcos Esteban Gacitua Guerrero tiene por requerido de pago a los demandados ya individualizados para luego concurrir, por expresa instrucción del apoderado de Entrelomas s.a demandante en los juicios ejecutivos señalados, al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y trabar embargo sobre dos inmuebles de propiedad de los demandados inscritos a fojas 24.916, N°37571 del Registro de Propiedad del año 2012 e inscrito a fojas 28.155, N°44.560 del Registro de Propiedad del año 2009. Finalmente, con fecha viernes 16 de septiembre de 2016, esto es, 7 días después del



falso requerimiento y notificación, el imputado don Marcos Esteban Gacitua Guerrero ingresó al sistema de tramitación electrónica del portal del poder judicial, en su calidad de receptor, estampando en expediente electrónico causa ejecutiva caratulada Entrelomas s.a con Miranda, rol 18.897-2016, seguida ante el 8° juzgado civil de Santiago atestado receptorial falso en carpeta electrónica con firma electrónica avanzada con el que dio cuenta de diligencia de notificación y requerimiento de pago por la suma de \$126.944.211, más reajustes, intereses y costas y certificando que con fecha 08 de Septiembre de 2016 concurrió al domicilio de calle Miraflores 178, piso 22, de la comuna de Santiago, el que señala como de la demandada, asegurando haber entregado copia de demanda y providencia que indica a persona adulta que no identifica y asegurando y certificando haber dejado citación para comparecer a sus oficinas para el día 09 de Septiembre de 2016 a las 14:00 horas. Además, ingresa atestado receptorial con el que dio cuenta de un supuesto requerimiento hecho con fecha 09 de Septiembre de 2016 así como embargo trabado sobre dos bienes raíces, evitando así que los demandados pudieran contestar demanda y oponerse a la ejecución dentro de plazo legal.

Hecho N ° 2

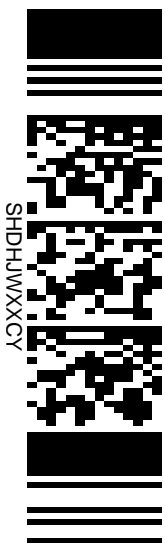
El día jueves 08 de septiembre de 2016 el imputado don Marcos Esteban Gacitua Guerrero, aproximadamente a las 12:20 horas concurre el al domicilio de calle Miraflores 178, piso 22 de la comuna de Santiago, en su calidad de Receptor Judicial y Ministro de fe nombrado por Decreto N°749 del Ministerio de Justicia de fecha 05 de Noviembre de 2013, por instrucciones de los demandantes en autos ejecutivos seguidos ante el 18° Juzgado Civil de Santiago,



causa rol 18.907-2016, caratulada Entrelomas s.a con Miranda, a objeto de proceder a materializar notificaciones y requerimiento de pago en la forma prevista en el artículo 44 y 443 ambos del Código de Procedimiento Civil, esto es, proceder a notificar y requerir de pago o dejar cédula de espera en su caso al querellante don Pablo Andres Miranda Jimenez, para luego de unos minutos retirarse del lugar sin entregar copia de las demandas, cédula de espera o documento alguno a la recepcionista del domicilio donde concurre.

Posteriormente, el día lunes 12 de setiembre del año 2016 el imputado don Marcos Esteban Gacitua Guerrero ingresó al sistema de tramitación electrónica del portal del Poder Judicial, en su calidad de receptor, estampando en expediente electrónico causa ejecutiva caratulada Entrelomas s.a con Miranda, rol 18.907- 2016, seguida ante el 18° juzgado civil de Santiago atestado rectorial falso en carpeta electrónica con firma electrónica avanzada con el que dio cuenta de diligencia de notificación y requerimiento de pago, certificando haber concurrido al domicilio de calle Miraflores 178, piso 22, de la comuna de Santiago, el que señala como de la demandada, asegurando haber entregado copia de demanda y providencia que indica a persona adulta que no identifica y asegurado y certificando haber dejado citación para comparecer a sus oficinas para el día 09 de Septiembre de 2016 a las 14:00 horas. Además, ingresó atestado rectorial con el que dio cuenta de un supuesto requerimiento hecho con fecha 09 de septiembre de 2016”.

TERCERO: Que, en cuanto al objeto de la acción impetrada, el razonamiento del recurrente descansa, en la infracción de normas de naturaleza procesal constituido por la supuesta vulneración al principio de la presunción de inocencia y a quién le corresponde la



carga de la prueba, pretendiendo con ello la modificación de los presupuestos fácticos tenidos por ciertos por los sentenciadores, los que resultan ser inamovibles, no obstante, la causal en análisis requiere el análisis y materialización de errores de derecho, en los términos que se ha razonado en la motivación primera, circunstancia que necesariamente implica la desestimación de la fundada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

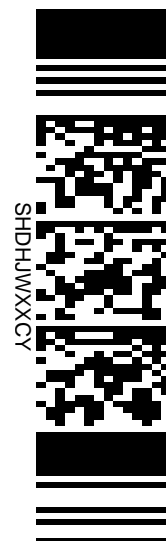
II.- En cuanto a la causal subsidiaria prevista en el artículo 374 letra e) en relación a los artículos 342 letras c), d) y e) y 297 del Código Procesal Penal:

CUARTO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e).* Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, señala en sus letras:

“c) Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297;

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo;

e) La resolución que condenare o absolviera a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere



atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar;”

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”*.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

QUINTO: Que, a pesar de que se cita en el recurso como causales concurrentes las previstas en las letras c), d) y e), sólo se fundamenta la eventual concurrencia de la primera de ellas, dejándose sin contenido las restantes, efectuándose a su respecto la sola enunciación legal.

SEXTO: Que la impugnación por la causal prevista en el artículo 374 e) en relación con el artículo 342 c) y 297 del Código Procesal Penal dice relación con el entendimiento de la existencia de un vicio producido en el razonamiento probatorio del tribunal, por cuanto según el recurso se habría infringido -en dicho proceso mental para fundar su convicción condenatoria en relación a Marcos Esteban



Gacitúa Guerrero- los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción. Todo ello, no obstante, se cita erróneamente el Tribunal respecto del cual emanó la sentencia recurrida y el delito por el que fue condenado el encartado.

Sin perjuicio de lo anterior se indica que “(...) coloca como carga de la defensa acreditar en definitiva la inocencia de los acusados y no en la carga de la prueba que corresponde por Ley al Ministerio Público.

De lo anterior, realmente Ssa., se evidencia una real falta de imparcialidad de las sentenciadoras, además de un juicio crítico, ácido y hasta despectivo, respecto de la prueba de descargo, sin considerar por cierto una nula capacidad de asumir la posibilidad de una duda razonable, que es lo que se puede y debe esperar en un juicio oral y lo que es peor aún, un subsidio evidente a la prueba de la querellante. Lo anterior, dado que con esos mismos argumentos podría caer también la versión de la víctima (si se entregaron las cédulas) ahí se evidencia un doble estándar probatorio y una falta de motivación, que obligan conforme a esta causal a anular la sentencia y el Juicio oral.

(...) adolece del vicio de falta de motivación, que se impugna por la vía del artículo 374 letra e), vicio que se manifiesta en diversas partes de la sentencia, donde se consigna un doble estándar probatorio por una parte y por otra una escasa fundamentación en torno a la prueba rendida, en especial la prueba de la defensa, la que lisa y llanamente el fallo rechaza por ser prueba de descargo, viola así la sentencia todas las disposiciones en materia de normas reguladoras de la prueba art. 297, por cuanto al valorar la prueba de cargo, contradice los principios de la lógica, las máximas de la



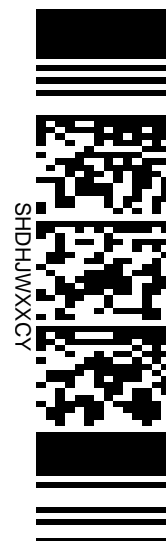
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y lo mismo hace al descartar la prueba de la defensa”

SÉPTIMO: Que, se ha sostenido en forma clásica que el principio de razón suficiente fue formulado por Wilhelm Leibniz, quien lo habría elaborado para explicar el fundamento de las “*verdades contingentes*”. Surge la necesidad de diferenciar entre el principio ontológico, según el cual “*tanto el ser, como el acontecer, tiene su razón suficiente*”, del principio lógico, para el cual “*Todo juicio, para ser verdadero, ha menester una razón suficiente*”

“Por ello, hay que ser cuidadosos en su aplicación y limitarse a exigir una ‘mínima actividad probatoria’ que pueda bastar para fundamentar la verdad de un enunciado. No se debe exigir una fundamentación completa que cumpla los más altos estándares de prueba (‘máxima actividad probatoria’), pues con ello nos apartaríamos del principio lógico para adentrarnos en los dominios del principio epistemológico y ontológico de razón suficiente” (Sana Crítica, Javier Maturana Baeza, Thomson Reuters, Santiago, 2014, p. 247 y 250)

En efecto, se señala que nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios: el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo.

El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser



"porque sí", pues todo obedece a una razón. En suma, el principio de razón suficiente nos dice: "todo tiene una razón de ser".

Por su parte, don Nelson Pozo Silva, en el texto Razonamiento Judicial, (Librotecnia, Santiago, 2009, p. 273), sin perjuicio de lo señalado, sistematiza este principio del buen razonar dentro de los principios ontológicos, llegando a la máxima que todo "*conocimiento debe estar suficientemente fundado*". Asimismo, al citar a Schopenhauer, a propósito de su cuádruple raíz del principio de razón suficiente, uno de esos vértices lo menciona como la "*relación lógica que concatena los juicios del entendimiento*". De manera que, en el proceso intelectual de los jueces durante el razonamiento probatorio, este principio se transforma en una suerte de guía objetiva que lleva al tribunal en su fundamentación desde la prueba rendida a las conclusiones a las que llega producto de las mismas.

Relacionamos tal principio lógico con el mayor énfasis que adquiere la fuerza inferencial, precisamente tratándose de la prueba indirecta, pues en el caso de la denominada directa generalmente el tema debatido dice relación solo con la credibilidad de dicha prueba.

Y en este caso, en los considerandos octavo y undécimo los jueces analizaron y valoraron los elementos de imputación rendidos en juicio, bajo el siguiente tenor:

"OCTAVO: (...) *En consecuencia, las declaraciones de los testigos ya referidos y del perito presentados a juicio por el actor, fueron coincidentes y armónicas en afirmar que el acusado concurrió al domicilio ubicado en Miraflores 178 piso 22, Santiago, al mediodía del 8 de septiembre de 2016, en su calidad de receptor judicial, pero sin dejar las cédulas; y que de acuerdo a los documentos signados con los números 1 al 4 de la acusadora, corresponden a las causas*



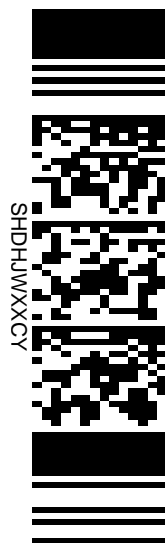
civiles rol N ° 18.907-2016 del 18 Juzgado Civil de Santiago y rol N ° 18.897-2016 del 8 ° Juzgado Civil, ambas caratuladas “Entrelomas S.A. con Miranda” y en los cuales se aprecia el timbre del acusado en que se identifica como receptor judicial y su firma.

Ello concuerda además con la instrumental N ° 8 del actor ya que en el pantallazo de la consulta de atención a público figura la diligencia ante el 8 ° Juzgado Civil. Engarzado con todas estas probanzas se encuentra el video que el tribunal apreció y en el cual se observa al acusado ingresar al hall del edificio, subir el ascensor, aparecer en el piso 22, dialogar brevemente con una persona en el mesón, manteniendo siempre en sus manos unos papeles que en momento alguno entrega o deja, retirándose del lugar con ellos. En este punto resulta imprescindible hacer notar que en las imágenes aparece la fecha y la hora esto es, 8 de septiembre de 2016 entre las 12.21.39 y las 12.25.08, lo que coincide con lo consignado por el propio acusado en los atestados receptoriales, en los juicios ejecutivos antes indicados.

Dicho video tiene fuerza probatoria para estos sentenciadores del momento que contó con el respaldo de un perito que explicó su contenido sin que le conste al tribunal alguna adulteración o vulneración, por no haber sido ello acreditado por los medios procesales correspondientes, no siendo suficiente para restarle mérito los solos dichos de la defensa.

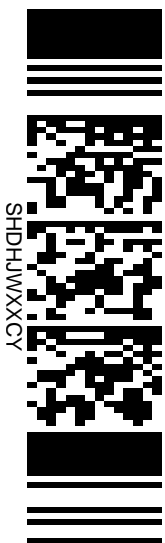
Por lo demás lo apreciado en el video es coincidente con lo que advierte el tribunal y con lo que relatan los testigos del acusador y el perito”.

“UNDECIMO. Alegaciones de la defensa. Corresponde ahora hacerse cargo de las alegaciones planteadas por la defensa. Así las



cosas, en lo concerniente al enlace que realiza el querellado con las causas civiles y que en los hechos existiría cosa juzgada, pertinente es, en primer término, analizar el contenido de las resoluciones en cuestión.

Al respecto, la resolución dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en el proceso Rol N° 18.907-2016, de fecha 25 de enero de 2017, por la cual se acoge el incidente de nulidad de la notificación impetrado por el ejecutado y querellante en esta causa, no se funda en el video, sino en la documental, testifical y por no constar en el sistema de georreferenciación que el ministro de fe hubiera estado en el domicilio del ejecutado. Asimismo, las resoluciones pronunciadas por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago, en parte alguna se hacen cargo del aludido video, e incluso la fechada treinta de junio pasado, al referirse al Rol N° 3373-2017, expone en su considerando 2° “y que ello se advertiría de unas grabaciones acompañadas al incidente”, lo que aún más denota que el video no fue visto, por cuanto, tampoco consta la realización de una audiencia de percepción documental, que es la forma que la ley prevé para la producción de este tipo de prueba, según el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, conforme al texto de la resolución citada, el incidente de nulidad se desestima en base a prueba documental, en virtud de la cual el tribunal de alzada entiende que el ejecutado tenía conocimiento del proceso y correspondía el lugar a su domicilio, y al referirse al hecho de haber dejado o no las cédulas el receptor, invoca nuevamente prueba instrumental y un argumento de tipo normativo, consistente en la presunción legal de veracidad que contempla el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, pero sin aludir a que desecha las alegaciones en base a lo

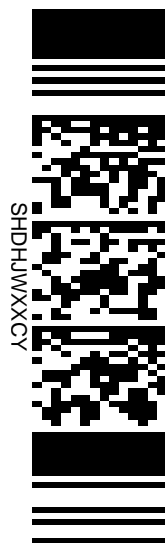


observado en video alguno. Ahora bien, no obstante que esta resolución dispone que la prueba del actor resulta más acorde con la realidad que la testifical y las grabaciones del ejecutado, lo cierto es que no consta el examen del video, respecto del cual no hay alusión alguna más que referencial, lo que es concordante con el hecho que la omisión de tal diligencia fuera parte de los fundamentos esgrimidos en el recurso de casación en la forma y en el fondo deducido por aquel entonces ejecutado Pablo Miranda.

En esta misma línea de análisis, cabe mencionar que la Excma. Corte Suprema no tuvo la oportunidad de referirse al video en mención, del momento que el recurso de casación en la forma y en el fondo deducido por el ejecutado fue declarado inadmisibile por resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno. Esta decisión no tiene la virtud que pretende la defensa, ya que ello no implica, entonces, que el receptor sí dejó las cédulas, cuya omisión se le inculpa en este juicio. En efecto, la decisión de dicho tribunal es sólo de forma, sin entrar a analizar el fondo y por tanto sin analizar las pruebas que se hubieren pretendido hacer valer, entre ellas, el mencionado video.

De consiguiente, se desprende que las decisiones en materia civil no atañen a la prueba incorporada en este juicio penal y tampoco ha sido previamente examinada, de lo cual, aun cuando este tribunal admitiera la tesis de la cosa juzgada, no podría fundar una decisión absolutoria en lo resuelto en los juicios ejecutivos.

Sin embargo, estos sentenciadores tampoco estiman procedente la institución de la cosa juzgada. En este sentido y como base de la discusión, imperioso es dejar asentado que los ámbitos de responsabilidades, civil y penal, son diversos y es por ello que de un



mismo hecho se pueden derivar distintas responsabilidades o bien un hecho puede generar responsabilidad de un solo tipo. Por su lado, el hecho de haberse visto las causas civiles de manera conjunta y la acumulación de recursos para la vista en segunda instancia, sólo constituye una herramienta procesal que la propia ley contempla por economía procesal y para evitar decisiones contradictorias en causas vinculadas (artículo 92 del Código de Procedimiento Civil), pero en este caso, además, al haberse decretado vista conjunta, denota que incluso en materia civil se reconoció que se trataba de procesos diferentes con sus propias particularidades.

En consecuencia, incluso si en los juicios civiles se hubiera esclarecido el particular asunto del video, cosa que no acaeció, no necesariamente hubiera generado una consecuencia en nuestra área de competencia y ello porque no concurren los requisitos legales de la cosa juzgada por no existir triple identidad, ya que lo ventilado en todo momento en materia civil guarda relación con la nulidad de una notificación deducida por un ejecutado en contra del ejecutante y si bien, uno de los argumentos fundantes del referido incidente guarda relación con la actuación del querellado, lo cierto es que en este juicio penal se discute la concurrencia de su responsabilidad penal, cosa que no se discutió en materia civil, y además, en base a una prueba que no fue objeto de análisis en sede civil. A mayor abundamiento, la legislación contempla el caso inverso al que nos convoca, esto es, sentencias criminales en materias civiles, ya que es eso lo que dispone el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en cuya interpretación coincide el tribunal con aquel planteado por el actor. Es más, incluso la propia norma confirma lo ya razonado al establecer



expresamente que ni aún establecidas ciertas responsabilidades penales, producen cosa juzgada en materia civil.

Por otro lado, indiferente es para este tribunal que en los juicios ejecutivos haya quedado establecido que Miraflores N° 178, piso 22, correspondía efectivamente al domicilio del señor Miranda, dado que lo que en este juicio importaba esclarecer era si habiendo concurrido el acusado, precisamente a ese domicilio, procedió a dejar las cédulas, dado que de su omisión y consecuentes atestados receptoriales en los que consigna lo contrario, deviene la tipificación de su actuar.

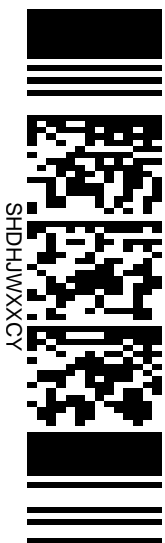
En otro orden de cosas, los documentos de la defensa, consistentes en los correos electrónicos por los cuales el abogado y testigo Hugo Ojeda, encarga la diligencia de notificación al acusado, no tienen el mérito de contrarrestar la prueba del actor, ya razonada, ni de liberar de responsabilidad penal al encartado, dado que dichos instrumentos únicamente dan cuenta del trabajo encomendado, pero no de su realización. Es más, con tales mails se corrobora que el encausado tenía efectivamente un motivo para concurrir a Miraflores N° 178, que es lo que hace, pero sin cumplir el cometido que se le encargó, como ha quedado establecido. Por lo mismo, no es correcta la deducción que hace la defensa, en cuanto a que, si el acusado es responsable, importa que el estudio jurídico del señor Ojeda encargó una simulación de notificación, dado que lo que se está señalando y dando por acreditado es que, en efecto, existía un encargo de notificación, lícito por cierto, pero que éste fue el que no se ejecutó, estampando lo contrario, lo que es atribuible sólo al agente.

Por otra parte, no corresponde al tribunal efectuar elucubraciones o suposiciones acerca de las razones que tuvo en



consideración el Ministerio Público en su momento para no sostener una acusación en contra del encartado, como tampoco divagar acerca de los riesgos que éste estaba o no dispuesto a asumir con su actuación, por cuanto ello escapa a las probanzas incorporadas y no son atingentes a la valoración que de éstas se ha hecho. En cuanto a las alegaciones relativas a la calidad o integridad del video, no consta que éste haya sido adulterado o vulnerado como lo indica la defensa, toda vez que de la apreciación directa que hizo el tribunal, se advierte que éste muestra una secuencia cronológica seguida y sin que se hubiera perdido la imagen en ningún momento, contando, por lo demás, con el respaldo de un perito del acusador que dio cuenta debidamente de su calidad. De ese modo, si la defensa pretendía desvirtuar lo observado por el tribunal, debió probar por los medios procesales que la ley contempla tal circunstancia, no siendo suficiente para ello sus solos dichos, más aún cuando no se aprecian “saltos temporales” y lo observado por estos sentenciadores coincide con lo que a su vez apreciaron todos los testigos de la querellante, incluyendo al perito que depuso en autos. A este respecto, lo cierto es que la defensa renunció a su peritaje, sin que el tribunal pueda desprender de ello conclusión alguna, por tratarse simplemente de una prueba no incorporada.

Resulta, en este punto, imprescindible señalar que las interpolaciones que se registran en el video no importan una manipulación como la que alega la defensa, dado que la ampliación que realiza el perito de ciertas partes de la imagen, no hace perder la visión de la imagen misma, la que se sigue igualmente observando, sin inconveniente alguno. Asimismo, imposible es obviar que la defensa nunca alegó que el video estuviese alterado en cuanto a su



fecha u horario, los que, por cierto, corresponden a la data y hora consignadas por el propio acusado en sus atestados receptoriales.

La alegación consistente en que la testigo Claudia Campos “se puso nerviosa” el día que concurrió Gacitúa a las oficinas del actor, dimanara únicamente de los dichos del acusado al prestar declaración, debiendo connotar que Campos atestiguó en juicio, explicando detalladamente las razones por las cuales consigue las filmaciones del 8 de septiembre de 2016, ya que con ellas pretendía proteger su trabajo, demostrando a sus jefes que nada había recibido, esto es, las cédulas respectivas, siendo entonces una motivación entendible en el escenario que nos convoca. Por lo demás, incluso el haber sido efectivo el nerviosismo de la testigo el día de los hechos, ello no desmiente el que el acusado, en definitiva, no entregó las cédulas, estampando luego lo contrario en los juicios ejecutivos señalados.

En cuanto a las alegaciones atinentes a la forma de litigar del querellante, señor Miranda, en las causas civiles, cabe consignar que el punto de atención de este juicio penal debe de centrarse en la actuación imputada al acusado, pues es ésta, la que por constituir un injusto, la que le entrega competencia a este tribunal. Por lo demás, no es baladí hacer notar que de las mismas instrumentales incorporadas por ambos intervinientes, es posible inferir que la tramitación de las causas civiles ha sido engorrosa, reflejando gran incordia entre las partes, al punto de resultar incluso sancionado disciplinariamente por el Pleno de la Iltma. Corte de Apelaciones el señor árbitro, Eugenio Benítez Ramírez, por infracción al numeral 2° del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, con fecha 13 de junio de 2016 en el Rol N° 1452-2016, por actuaciones imprudentes, falta de corrección y de imparcialidad en proceso precisamente



vinculado a los juicios civiles referidos. Además, la declaración del testigo Hugo Ojeda dio cuenta de las sanciones impuestas a los abogados de ambas partes, por lo que, ciertamente no es posible más que desprender que la tramitación de las causas en que tuvo lugar la actuación del acusado ha sido conflictiva, pero esto no repercute en el comportamiento del encausado sobre el que se ha reflexionado al alero de las pruebas incorporadas y en orden a determinar si el hecho probado se comprende en la figura penal invocada, respecto de la cual se determinó su responsabilidad.

Finalmente, en lo relativo a las calificaciones y ausencia de amonestaciones del receptor, cabe indicar que tales instrumentos únicamente tienen mérito para demostrar que a la fecha de los hechos el acusado había obtenido calificación 6,7 en lista sobresaliente, sin sanciones a su respecto, pero de ello no se puede derivar una decisión exculpatoria a la luz de las probanzas analizadas ni tampoco colegir, como lo alega la defensa, que en atención a esos antecedentes es inviable que hubiera cometido un delito, ya que si bien puede aparecer como dificultoso de concebir, lo concreto es que examinada la prueba se arriba a una convicción contraria, derribando así, la presunción de inocencia que lo amparaba y la deducción que plantea el defensor”.

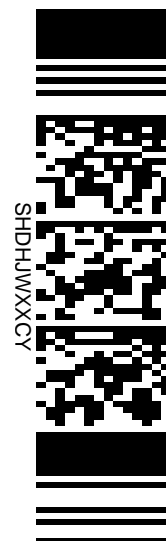
OCTAVO: En efecto, el análisis de las referidas declaraciones, corroboradas con los mentados medios de convicción constituyeron pruebas directas, que, en caso de creérseles, implicó que los jueces dieran por establecido los hechos. Pero siempre dentro del ámbito de la libertad probatoria sujeta a los criterios expresados en el artículo 297 del citado del Código Procesal Penal, esto es, dentro del proceso de valoración de la prueba.



Recordemos que de lo que se trata finalmente en un juicio penal es que el tribunal pueda llegar a establecer los hechos en virtud de los cuales se dicta una sentencia condenatoria, capaces de llegar a esa convicción, de modo que los sentenciadores buscan dentro de los elementos probatorios que le aportan los intervinientes verificar si mediante ellos es posible arribar a una conclusión fáctica determinada, más allá de toda duda razonable. Así lo sostiene Ferrer Beltrán (La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 147), que para considerar probada la hipótesis de culpabilidad *“deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: 1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc.”*

En este caso, el proceso mental de los jueces para arribar a la convicción de culpabilidad se afincó en la valoración que se efectuó de dicha prueba, a juicio de la defensa, sin respetar los señalados principios de la no contradicción y corroboración, al punto que en su concepto la única solución posible sería dictar una sentencia absolutoria a favor de Gacitúa Guerrero, pues debido a la infracción denunciada, no se podría arribar al establecimiento de la participación de su representado en el hecho punible en que fuera acusado.

NOVENO: Que, la Corte Suprema ha señalado qué debemos entender por este principio lógico que rige el pensamiento, en este caso, de los jueces penales. Así, en causa Rol N° 16882-2015, en su considerando décimo tercero, ha indicado: *“Respecto a la*



desatención de la regla de la lógica de la razón suficiente en la fundamentación de la sentencia, que arguye el arbitrio, dicha regla demanda que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente (SCS Rol N° 21.304-2014 de 5 de mayo 2015), por lo que para postular con éxito la vulneración de esta regla, necesariamente se requiere que el impugnante identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrado la sentencia -presencia del acusado en el lugar de los hechos, por ejemplo- y que genera la disconformidad de su parte y, luego, que puntualice las afirmaciones o proposiciones con que la sentencia tuvo por probado dicho hecho -por ejemplo, reconocimiento del acusado por un testigo presencial o que el apodo entregado por la testigo del autor corresponde al del acusado- y que no se hayan fundamentadas en una razón que las acredite suficientemente -por ejemplo, que el testigo presencial reconoció a un tercero y no al acusado, o que el apodo del autor aportado por el testigo corresponde a un tercero y no al acusado-, de manera de evidenciar que el hecho dado por acreditado no es compatible con una estructura racional del pensamiento donde el denominado “consecuente” debe hallarse necesaria y estrechamente vinculado con el “antecedente”.

DÉCIMO: Que, de conformidad a la doctrina expresada por la Corte Suprema, para estar en presencia de una infracción al principio de la razón suficiente, tal como ha sido definido, se requiere que el impugnante: 1° Identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrada la sentencia; 2° Puntualice los datos externos con que la sentencia tuvo por probado dichos hechos; 3° Señale en forma específica que dicha o dichas proposiciones fácticas no se hayan



fundamentado en una razón que las acredite suficientemente, de manera unívoca.

Por su parte, en cuanto al principio de no contradicción, de conformidad a la doctrina expresada por nuestro máximo Tribunal para estar en presencia de una infracción en el contexto del proceso penal, se requiere que el impugnante: 1° Identifique las proposiciones fácticas que se refieren a escenarios idénticos contenidas en la sentencia y; 2° Señale las conclusiones afincadas en una sola de las proposiciones contradictorias, sin embargo, a que llega el tribunal.

UNDÉCIMO: Que, en este sentido, si toda *afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente*, se ha cumplido en la especie, toda vez que la declaraciones efectuadas por los diferentes deponentes, corroboradas entre sí y por los demás elementos de convicción, bajo el cumplimiento y fundamentación en los términos que preceden, aparecen provistos de elementos de credibilidad de sus testimonios que se afincan en los parámetros precisados con antelación, no divisándose la ausencia de una razón suficiente o el no respeto al principio de la no contradicción para concluir la participación del representado del impugnante en el hecho delictual de que se trata, por lo que no se comparte este argumento invalidatorio sostenido por la defensa.

Asimismo, es dable señalar que el principio de la no contradicción es un tema que dice relación con lo argumentado por el tribunal en su sentencia que conduce a la invalidación de su razonamiento, no tratándose de un problema respecto a discrepancias entre la valoración efectuada por el tribunal y la



planteada por la defensa de Gacitúa Guerrero, argumento suficiente para desechar también este motivo absoluto de nulidad.

DUODÉCIMO: Que los razonamientos precedentemente reseñados, independientemente si fueran compartidos o no por la defensa de Gacitúa Guerrero o lo que se analizará con posterioridad, constituyen reflexiones idóneas que permiten entender dentro de la lógica, la convicción de los jueces cuyas conclusiones no desbordan los márgenes entregados por la ley y especialmente las máximas de experiencia, la lógica y los principios científicamente afianzados.

DECIMOTERCERO: Que, así las cosas, no cabe más que concluir que en el caso en cuestión no se configura la causal de nulidad impetrada -artículo 374 letra e) en relación con lo dispuesto en el artículo 342 letra c) y artículo 297 del Código Procesal Penal-, por lo que se hace forzoso rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Marcos Esteban Gacitúa Guerrero fundado en dicha causal.

III.- Ejercicio de la facultad prevista en el artículo 379 inciso segundo en relación con el artículo 374 letra f) y 342 letra d) del Código Procesal Penal:

DECIMOCUARTO: Que, sin perjuicio de lo analizado precedentemente, cabe recordar que el inciso segundo del artículo 379 del Código Procesal Penal refiere que: *“Interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el recurso que se hubiere deducido en favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que aquél fuere alguno de los señalados en el artículo 374”*.



Por su parte, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal dispone que *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados:*

e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e);”

En efecto, el artículo 342 letra d) del mentado cuerpo normativo establece: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá:*

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo;”.

DECIMOQUINTO: Que el artículo 193 del Código Penal establece que *“Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:”.*

En cuanto a la tipicidad es dable señalar que se requiere en primer lugar que, el sujeto activo sea el empleado público, que comete alguna de las falsedades señaladas en el artículo 193 del Código Penal -materiales e ideológicas- y; que el objeto material corresponda a un instrumento público.

En lo pertinente, respecto de la culpabilidad se indica que *“La ley ha querido evitar la sanción de esta clase de falsedades cometida accidentalmente o por negligencia (salvo el caso del art. 443 COT), y aun con dolo eventual, pues al utilizarse la expresión “abusando de su oficio”, se ha querido limitar la punibilidad a los hechos cometidos con dolo directo”.* (Sergio Politoff L, Jean Pierre Matus A. y María Cecilia Ramírez G., “Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte



Especial”, Segunda Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, año 2004, página 556)

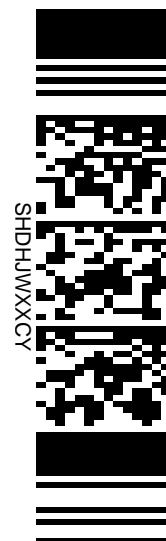
En efecto, el elemento subjetivo del tipo “*abusar de su oficio*” debe evidenciarse de los antecedentes de la causa y del consecuente análisis del fallo, esto es, que la falsificación no se realizó por negligencia o debido a algún error de parte del acusado, sino que se materializó la concurrencia de dolo directo.

Por su parte, se señala en doctrina que, el artículo 302 del Código Penal Español, anterior al de 1995, resulta similar a los términos en que aparece redactada la norma en análisis de nuestro cuerpo punitivo. (Sergio Politoff L, Jean Pierre Matus A. y María Cecilia Ramírez G., “Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial”, Segunda Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, año 2004, página 557). Es así como el artículo 302 del antiguo Código Penal Español disponía: “*Será castigado con las penas de presidio mayor y multa de 1000 a 10.000 pesetas el funcionario público que abusando de su oficio cometiere falsedad*”. En este sentido, resulta pertinente citar lo que el Tribunal Supremo Español ha sostenido en diversos fallos, a saber: “*Son requisitos del delito la alteración o mutación de la verdad realizada por cualquiera de los modos por él mismo establecidos, siempre que de manera inequívoca afecte en lo sustancial a la integridad del documento y a su eficacia, y, además, no sea debida a meros errores o equivocaciones ajenos a todo propósito doloso (S. 29-1-934; t. 130, pág. 92); “(...) y de igual modo, la intención que tuviera el procesado recurrente al realizar el hecho enjuiciado como acción penada por la Ley ha de entenderse siempre ejecutada con voluntariedad o intención maliciosa o dolosa en el agente al no constar afirmación de*



hecho alguna entre los probados sobre la que pueda darse por cierta causa que la destruya, de acuerdo con lo que establece el pf. 2° del art. 1° del Código Penal, por lo que no es posible estimarse la acción como culposa o imprudente (S. 3-5-943, Rep. Jurisp. Aransadi, 600); “Teniendo en cuenta las razones alegadas por la Sala para estimar la falta de realidad punible de los hechos probados, porque examinados en conjunto se deduce de ellos que no medió la voluntad maliciosa determinante del dolo que como elemento interno y esencial caracteriza el delito (...) (S. 12-2-932; t. 126, pág. 143)”; “No hay delito de falsificación si el Registrador liquidador sustituto cometió error material involuntario con ocasión de la liquidación de impuesto de Derechos reales en el caso de autos; su falta de cuidado y negligencia podrán dar lugar, en todo caso, a una acción civil por parte del perjudicado (S. 28-11-925; G.6-4-926; t. 112, página 692)”, “Un error material, una equivocación involuntaria, no puede constituir delito de falsedad ni otro alguno si no se consignan suficientes hechos como probados para acreditar que en todos sea aplicable la misma calificación. (S. 12-6-878; G. 23-8-878; t.18, página 557)”. (Manuel Rodríguez Navarro, “Doctrina Penal del Tribunal Supremo, Tomo Segundo, Segunda Edición, año 1960, páginas 2555 a 2560).

DECIMOSEXTO: Que en la motivación novena de la sentencia objeto del presente recurso de nulidad se señala: *“Que el hecho establecido en el motivo séptimo es constitutivo del delito de falsificación de documentos públicos o auténticos, a los que se refiere el artículo 193 N ° 4 del Código Penal, y respecto del cual dispone: “Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 4° Faltando a la verdad en la narración de*

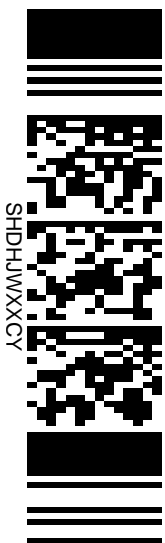


hechos sustanciales”., pues resultó probado que un empleado público, omitió dejar cédulas de notificación, consignando posteriormente dicha diligencia como efectiva en sus atestados receptoriales, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

En consecuencia, concurren todos y cada uno de los elementos del tipo penal referido previamente, en efecto, el sentenciado es Receptor Judicial y en esa calidad actuó, considerándose de conformidad a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal, empleado público, calidad que se acreditó con el documento N ° 10 de la defensa, consistente en copia de Decreto 749 de fecha 05 de Noviembre de 2013, del Ministerio de Justicia, con constancia de toma de razón, que da cuenta de la calidad de Receptor Judicial del acusado don Marcos Gacitúa Guerrero.

Asimismo, el objeto material del delito es un instrumento público o auténtico, es decir, el autorizado con las solemnidades legales por competente funcionario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1699 del Código Civil, y aquellos a los que la ley declara como tales, de manera que sin duda alguna las actas receptoriales gozan de la calidad antes descrita, y en el caso particular, se trata de diversos atestados receptoriales, incorporados en dos causas civiles distintas, una de ellas es la incoada en el 18 ° Juzgado Civil de Santiago, Rol N ° 18.907-2016, caratulada Entrelomas S.A. con Miranda; y la otra causa es la sustanciada ante el 8 ° Juzgado Civil de Santiago, Rol N ° 18897-2016, caratulada Entrelomas S.S. con Miranda. (...)

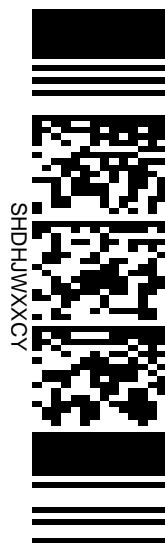
“De acuerdo a lo referido, claramente estamos en presencia de dos delitos de falsificación de instrumento público, que da cuenta del



actuar doloso del sentenciado, toda vez que concurrió al edificio Fundación, ubicado en Miraflores 178, piso 22, con el objeto de notificar y dejar las correspondientes cédulas al demandado o ejecutado en dos juicios diversos, como ya se detalló pormenorizadamente en los párrafos anteriores, diligencia que no practicó, sin embargo estampó haberlas realizado, faltando a la verdad en ambos expedientes, repitiendo su actuar delictivo en causas diversas, de manera que categóricamente se disiente de la tesis de la defensa de encontrarnos frente a un solo hecho ilícito. Finalmente, de conformidad al N ° 4 del artículo 193 del Código Penal, los hechos acreditados corresponden a uno de los casos previstos en dicha norma, que consiste en faltar a la verdad en el otorgamiento de un documento formalmente verdadero, recordemos que el sentenciado es Receptor judicial, de manera que la materialidad del instrumento no fue cuestionada, incluso tiene su timbre de Receptor, y en las actas dio fe de haber entregado las cédulas, lo que finalmente se probó no ser efectivo, de manera que esta falsificación es de aquellas que la doctrina denomina “falsificación ideológica”.

Respecto al grado de desarrollo del delito, éste es de consumado, al haberse estructurado totalmente los elementos que requiere el tipo penal.”

DECIMOSEPTIMO: En la especie y de la atenta lectura del fallo recurrido, especialmente del considerando noveno, es posible colegir que en parte alguna se razona respecto de la forma de cómo se configura uno de los elementos esenciales del delito de falsificación de instrumento público, constituido por la especial faz subjetiva requerida en el tipo penal en análisis -“abusando de su



oficio”- a vía de controlar, si efectivamente la actividad judicial se ha movido dentro de los parámetros de la legalidad.

DECIMOCTAVO: Que en consecuencia, se advierte que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal incurrió en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra f) en relación con el artículo 342 letra d) del Código Procesal Penal, al omitir las razones legales o doctrinales que sirvieron para calificar los hechos como el delito de falsificación de instrumento público, ilícito previsto y sancionado en el artículo 193 N° 4 del Código Penal, por cuanto según se razonó, no existió pronunciamiento, ni desarrollo respecto del elemento subjetivo del tipo penal en análisis, por lo que esta Corte haciendo uso de la facultad referida en el artículo 379 transcrito precedentemente, anulará el fallo y dispondrá lo pertinente, según se indicará.

Por estos fundamentos y lo previsto, además, en los artículos 374 letra e) 342 letra b) y 379 del Código Procesal Penal, artículo 193 N° 4 del Código Penal **se acoge** el recurso de nulidad interpuesto por doña Jacqueline Rodríguez Salazar, Defensora Penal Privada, por el condenado Marco Esteban Gacitúa Guerrero, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha seis de abril de dos mil veintiuno, en la causa RIT N° 191-2020 del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y en consecuencia, se declara que se invalida dicho fallo, como las audiencias de juicio y se retrotrae la causa al estado de efectuar un nuevo juicio oral, por Tribunal no inhabilitado..

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.

Reforma Procesal Penal N° 1937-2021.



Pronunciada por la Tercera Sala de esta Il'tma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro se'or Juan Crist3bal Mera Mu'oz e integrada por la Ministra Ver3nica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante se'or Cristi3n Lepin Molina.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>